

CAPACITACION DE JOVENES DESESCOLARI- ZADOS

En las modernas teorías del aprendizaje es aceptado que uno de los principales condicionantes del aprendizaje es el aprendizaje previo. Esto no es más que lo que siempre han sabido los maestros: el niño que tiene una «buena base» previa es el que tiene mayores chances de desempeñarse exitosamente.

Lo anterior, a la hora de definir una política nacional de capacitación, implica concentrar los esfuerzos en una educación básica de cobertura universal que enseñe a aprender. Esto concuerda con los numerosos estudios que demuestran que es más rentable una formación integral universal que la capacitación ocupacional temprana.

Sin embargo, la educación integral universal no es un problema de leyes; no es un proceso que culmina de un día para otro. Es una meta que se alcanza poco a poco y deja abierta la necesidad de darle respuesta a los inmensos contingentes de población que son excluidos de la educación formal y que no tienen herramientas suficientes para integrarse legítimamente a la sociedad.

Hay, según la Enjuve (Encuesta de Juventud, realizada por el Ministerio de la Familia), 1.065.848 (el 26,5% del total de jóvenes) que no estudian ni trabajan. Estos jóvenes, además, tienen un patrimonio escolar recortado, ya que dos terceras partes no tienen educación básica completa: son 680.092 personas en situación de vulnerabilidad extrema indiscutible: no tienen educación básica completa, no están estudiando, no están en el mercado de trabajo, no pueden ingresar en él y, si lo hacen, es en las peores condiciones. Peor aún: están excluidos hasta de los programas regulares del INCE. Es decir, la única oportunidad que tienen de integrarse a nuestra sociedad de un modo legítimo es a través de la capacitación no formal suministrada por las entidades capacitadoras de la sociedad civil.

Hasta hace poco, la educación técnica no formal había estado a cargo, fundamentalmente, del INCE. Esta institución tradicionalmente se ha encargado de ofre-

cer capacitación a la población excluida de la educación formal. Ahora, salvo en el programa de Juventud Desocupada que para el año 1994 atendió a 5.000 jóvenes solamente, concentra sus esfuerzos en la formación dentro de las empresas o a la formación de recursos humanos ajustados a los requerimientos de las empresas más modernas, y por ello se ha vuelto selectiva la escogencia de sus alumnos a quienes se les está pidiendo 9º grado de educación básica, laborar en una empresa postulante o, simplemente, pasar una prueba que es, de por sí, segregadora. Esta política, que es correcta en el marco de un plan de formación de recursos humanos para lograr empresas más competitivas (vista la realidad desde una perspectiva microeconómica) deja fuera y sin atención a importantes grupos de población que más difícilmente pueden incorporarse a los requerimientos de las grandes empresas.

Actualmente la educación técnica no formal dirigida a la juventud desocupada se lleva a cabo por algunas ONG que responden a programas de la Fundación Juventud y Cambio, del INCE y, fundamentalmente, del Ministerio de la Familia.

Insertar esta población implica varios retos como país, entre ellos:

1. MAS ALLA DE LA CAPACITACION LABORAL: LA INSERCIÓN SOCIAL

Un plan nacional de capacitación a la población excluida debe estar orientado, ante todo, a permitir la inserción, no sólo en el mercado de trabajo, sino en la vida ciudadana.

En efecto, el primer y más obvio sentido de una política de capacitación es formar para el trabajo; esto es, adiestrar mediante el desarrollo de habilidades y destrezas para oficios y profesiones que puedan ser ejercidos de modo dependiente o independiente.

De este modo, la capacitación para el trabajo obedece a un triple propósito. Por una parte, responde a la necesidad de ofrecer oportunidades dignas, éticas y legítimas de inserción a la sociedad, y esto mediante el ejercicio de las facultades

Fabrizio Macor

Hay 1.065.848 (el 26,5% del total de jóvenes) que no estudian ni trabajan. Estos jóvenes, además, tienen un patrimonio escolar recortado, ya que dos terceras partes no tienen educación básica completa: son 680.092 personas en situación de vulnerabilidad extrema indiscutible

propias que son requeridas por el colectivo social en virtud de su utilidad. Por otra parte, responde a la necesidad de la sociedad de preservarse y modificarse produciendo, reproduciendo y transfiriendo los conocimientos y tipos de ocupaciones que son necesarios para la reproducción social de las condiciones materiales y espirituales de la existencia. Y, finalmente, responde a las condiciones impuestas por los patrones tecnológicos emergentes, a saber: las nuevas tecnologías, la robótica, informática, conservación de alimentos, nuevos materiales, etc. Pues esta revolución tecnológica ha venido acompañada de tecnologías «blandas» (de tipo organizacional) que, junto a aquéllos, demandan un trabajador con un perfil diferente al tradicional: con énfasis en la iniciativa más que en la disciplina, con énfasis en el trabajo en equipo más que en el trabajo individual, con capacidad de adaptación a la novedad más que con conocimientos específicos de un oficio. De allí la importancia de concebir la capacitación como un proceso permanente, dinámico y donde lo único que no pierde vigencia es la necesidad de aprender a aprender.

En la medida en que el adiestramiento laboral está aparejado con la idea de ofrecer oportunidades dignas, éticas y legítimas, la política de capacitación laboral debe tener dos atributos.

En primer lugar, deben ser oportunidades de capacitación valiosas y valoradas por los sujetos que reciben la capacitación; pues la dignidad implica que el sujeto (en este caso el aprendiz beneficiario de la política de capacitación) sea un autor autónomo y libre de su vida: escoge y evalúa la oferta de capacitación. Y más: la dignidad implica que el sujeto sea visto principalmente como fin en sí mismo, y no como mero medio; esto último en contraste con el discurso según el cual la capacitación tiene como único fin el desarrollo económico, la competitividad como país, etc., y olvida que el desarrollo de las personas es el fin y el medio para el desarrollo económico y social.

Y, en segundo lugar, deben ser oportunidades legítimas; es decir, socialmente aceptadas y valoradas. Por supuesto, al hacer referencia a la valoración social de las ocupaciones no se incluye la moji-gata valoración de la sociedad hacia «los trabajos más humildes»; se hace referencia a la valoración que acepta y está dispuesta a pagar en «contante y sonante» aquellos servicios que requiere. En una palabra, la política de capacitación debe orientarse hacia empleos bien remunerados y la remuneración debe ser una variable central a la hora de evaluar el impacto.

En la medida en que la capacitación responde al propósito de producir y reproducir las ocupaciones requeridas para el desarrollo socioeconómico, la política de capacitación debe ofrecer capacitación que permita la inserción de la producción nacional en el mercado internacional. Esto implica la capacitación en áreas en las que el país tenga ventajas comparativas.

Ahora bien, la capacitación no puede limitarse al adiestramiento laboral puro y simple. Es de aceptación general que existe un problema de exclusión socio-cultural. De allí que la capacitación laboral debe concebirse ampliamente, e incluir instrumentos cognitivos (individuales y colectivos) para la inserción y, más aún, para la participación social.

En este sentido deben tomarse en cuenta aspectos que socavan las posibilidades que la gente se asuma, se reconozca a sí misma como creadora de su biografía. En este sentido debe plantearse el enfrentamiento del fatalismo, como una forma de desesperanza aprendida a partir de los múltiples fracasos personales y colectivos, que, aunque tienen su fundamento en las estructuras socioeconómicas (Martín Baró) que son el marco donde se construye el saber del sentido común, requieren que se rompa el círculo

vicioso: se trata del substrato sicosocial que impide que el individuo asuma las riendas de su propio desarrollo.

También se trata de superar rasgos como la no asunción de la propia responsabilidad frente a lo público, la ausencia de compromiso con la tarea bien hecha, etc.

Y también se trata de disponer de los sistemas cognitivos que permitan información de carácter general. Y aquí hay que incluir desde las estrategias cognitivas y metacognitivas que permitan desarrollar la lectoescritura y el cálculo numérico, hasta el conocimiento instrumental de los modos de acceder a la institucionalidad para solucionar los problemas.

2. DEL DIAGNOSTICO GLOBAL A LA INCERTIDUMBRE MANEJABLE

Uno de los mayores deseos de quien realiza una acción es disponer de toda la información del entorno. Pero no siempre toda la información está disponible, y a veces ni siquiera es necesaria.

En el caso de la formación técnica, lo teóricamente deseable es conocer la oferta de empleo por tipo de ocupación; de este modo se podría ajustar la oferta de capacitación a los requerimientos del mercado de trabajo. Pero la realidad no siempre es tan simple.

En efecto, no puede ignorarse el hecho de que, en economías en recesión, el mercado de trabajo se contrae por la simple reducción de la actividad económica; y en este contexto puede plantearse la alternativa de proyectos de capacitación que no respondan al mercado de trabajo sino que lo construyan: se trata de los proyectos de desarrollo comunitario y las estrategias de producción microempresarial.

Este tipo de proyectos, que se ajustan a las economías en recesión pero que no son incompatibles con el crecimiento económico, no requieren de estudios minuciosos del mercado de trabajo. Todo lo contrario. Lo que realmente necesitan es iniciativa e imaginación.

Los jóvenes entre 15 y 24 años que participan en algún tipo de asociación son el 17,2%, y de éstos, el 53,3% lo hace en asociaciones deportivas. La participación comunitaria es pobre; la participación ciudadana también

3. MAS ALLA DE LOS CRITERIOS DE EDAD: LOS NIÑOS, LOS ADOLESCENTES NECESITAN RESPUESTA

La necesidad de capacitación está ocurriendo en un contexto de crisis económica de carácter estructural. Una de las expresiones de la crisis es el requerimiento de capacitación de parte de población en edad escolar que necesita recursos para su sobrevivencia.

Definir una política de capacitación hacia este segmento etario, al menos a la hora de definir lineamientos, no es sólo, ni principalmente un problema técnico, sino ético. ¿Se va a capacitar a los niños y adolescentes para su inserción laboral inmediata? O, por el contrario, ¿se va a capacitar a los niños y adolescentes que ya están dentro del mercado de trabajo (de una manera precaria y sufriendo formas de explotación especial) para que desarrollen sus destrezas y se les abran las posibilidades de la reinserción escolar? O, sencillamente, ¿no se va a capacitar para el trabajo a los niños y adolescentes desescolarizados porque lo único aceptable es la reinserción escolar?

La capacitación, pura y simple, de niños y adolescentes para su inserción inmediata en el mercado de trabajo no es una opción aceptable. En primer lugar no responde al principio de la igualdad de oportunidades: adiestrar a los niños y adolescentes que fueron excluidos de la escuela para la competencia en el mercado de trabajo adulto es aceptar un sistema que le cierra las puertas a unos y se las abre a otros: los que salieron del sistema educativo que entren al mercado de trabajo.

La opción radicalmente opuesta no es oportuna: es justa, pero no necesariamente aplicable y eficaz. Quizás sea cierto que el objetivo de política sea la reinserción escolar. Pero esto no implica que la vía más eficaz sea no dar capacitación a los niños y adolescentes que trabajan, buscan trabajo o están en la necesidad de hacerlo. Pues ellos, de hecho, trabajan o necesitan hacerlo, y son explotados —o pueden serlo— como menores sin con-

ciencia de sus derechos.

De allí que lo razonable sea dar la capacitación, y esto no sólo es dar herramientas técnicas de trabajo sino también conocimientos cívicos que les permitan defenderse en un mundo que muchas veces es hostil. En otras palabras, la capacitación de niños y adolescentes debe estar orientada al logro de una estadía digna en el mercado de trabajo, junto con la posibilidad de la reinserción escolar, para la cual hay que dotar al niño de los conocimientos pertinentes para la reinserción escolar.

Ahora bien, mientras la reinserción escolar se logra, la capacitación de niños y adolescentes debe ofrecer herramientas para el aprendizaje permanente mediante mecanismos educativos no formales que ofrezcan conocimientos socialmente relevantes y que sean demandados por los mismos niños. Dentro de esta línea, existe una propuesta en el Ministerio de la Familia que es realizada por Maizal, quien ha dotado a niños desescolarizados de herramientas que han permitido su reinserción exitosa a la escuela.

4. MAS ALLA DE LA INSERCIÓN LABORAL: LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

Uno de los resultados de la Encuesta de Juventud es el referido a la desmovilización política y la desmovilización general, entendiendo por ésta a la participación pobre en la construcción de la sociedad. De hecho, los jóvenes entre 15 y 24 años que participan en algún tipo de asociación son el 17,2%, y de éstos, el 53,3% lo hace en asociaciones deportivas.

La participación comunitaria es pobre; la participación ciudadana también. Y más si se considera que la participación muchas veces no trasciende el acto gregario y no llega al corazón mismo de la participación: la construcción del sentido y direccionalidad de la acción social; es decir, participar no sólo es hacer co-

sas, también es pensar qué cosas se pueden hacer. La política de capacitación no puede ser insensible a esta realidad. Y el dar respuesta a esta realidad no es, ciertamente, presentar un manual de la participación, sino participar de hecho. Y esto empieza por la participación en la construcción del proyecto de los centros de capacitación, y éstos deben ofrecer los mecanismos para ello.

Y hay más. Los proyectos de capacitación pueden estar integrados a proyectos de desarrollo local, comunal o municipal. Esto implica romper con la noción de capacitar para un mercado de trabajo, y es diseñar una política que parta de la vida cotidiana de las comunidades de nuestro país en donde las redes de solidaridad interpersonal se construyen en el barrio antes que en los espacios de trabajo. Sobre esto hay pocas experiencias, pero aleccionadoras. Una de ellas, apoyada por el Ministerio de la Familia, la realiza la Escuela Taller Angostura: un barrio decidió salir de la marginalidad y está construyendo la urbanización donde vivirá: con multihogares, zona rental, bulvar y casas bellas y funcionales con diseños respetuosos de nuestra identidad cultural.

5. MAS ALLA DEL ESTADO EJECUTOR: EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL SON CAPACITADORES

La capacitación no es sólo un problema del Estado. Este no es el único actor al que le compete la capacitación y, además, no es el único interesado en ejecutar una política de capacitación.

La razón es que hay otros actores sociales que, por su filosofía, inclinaciones éticas o vínculos con el entorno social, buscan participar en la capacitación. Y, además, en el caso venezolano, el Estado ha sido en un buen grado incompetente en su política de capacitación. De aquí la importancia de convocar a otros actores sociales en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas de capacitación.

Pero hay más. La exclusión de los jó-

Hay 2.116.984 jóvenes que han desertado de la escuela a los 19 años de edad, o antes. El 95,8% deja la escolaridad formal porque no tienen la oportunidad de estar allí: el 27,5%, por «falta de recursos»; el 23,1%, «por tener que trabajar»; el 11,3%, por «rendimiento»; el 8,8%, por carencias propias de la «oferta» educativa; el 5,7%, por «embarazo»; el 3,3%, por razones de salud. Y hay una razón para no estudiar que merece especial mención, a saber: el 13,6% de la población no considera que sea importante estudiar

venes del mercado de trabajo se expresa también en el hecho que, según la Encuesta de Juventud del Ministerio de la Familia, el 76% de los jóvenes demanda cursos de capacitación para el trabajo. Esto demuestra la debilidad sentida por los jóvenes con respecto a su formación para el trabajo. Y además es importante señalar que, no obstante que el 76% demande cursos, sólo el 21% los realiza. Es decir, hay un 55% de la población joven que demanda un servicio que no recibe: capacitación para el trabajo. Esta necesidad ocurre en un contexto de crisis fiscal de carácter estructural. En esta situación ninguna forma de reducción del gasto es una alternativa, pues sería desatender a más de dos millones de jóvenes. Frente a esto, la única alternativa es optimizar la eficiencia del gasto, y, para ello, una estrategia cuya importancia salta a la vista es sumar voluntades y esfuerzos: aprovechar y optimizar las iniciativas y los recursos materiales y espirituales que hay en la sociedad civil en el área de capacitación.

Ahora bien, la convocatoria no debe hacerse llamando a los miembros de la sociedad civil a que participen como meros ejecutores de las políticas. La sociedad civil debe ser convocada a participar también en la construcción del sentido de la acción.

Esto último debe interpretarse en dos sentidos. Por una parte, debe entenderse en un sentido macro: la política de capacitación, y, más aún, un proyecto nacional de capacitación debe ser pensado y formulado a partir de los intereses, reflexiones y situaciones vivenciadas por las organizaciones vinculadas con la capacitación.

Por otra parte, la participación puede entenderse en un sentido más cercano a la cotidianidad. Se trata de que, tal como se asomó antes, las entidades capacitadoras convoquen a los actores de su entorno a participar en la construcción de un proyecto institucional en las entidades capacitadoras, y para ello hay que permitir que fluyan las potencialidades heurísticas de las organizaciones y centros.

6. MAS ALLA DE LOS LIMITES DE LA FORMALIDAD Y NO FORMALIDAD

La escuela venezolana produce excluidos. Si tomamos las estadísticas del Ministerio de Educación, cada año «desertan» unos 300.000 estudiantes de la Educación Básica. De cada 100 niños que empiezan el 9º grado sólo 25 continúan en el Ciclo Diversificado y Profesional. Si tomamos como fuente las estadísticas de encuestas, las cifras son menos graves, aunque no dejan de ser desalentadoras. Así, según la Encuesta de Juventud del MF, hay 747.609 jóvenes (32,2% de los que no estudian y el 18,6% del total de jóvenes) que han abandonado la escuela antes de haber cumplido 15 años. Estos son los «desertores» infantiles. La misma fuente señala que hay 2.116.984 jóvenes que han desertado a los 19 años de edad, o antes: 91% de los que se retiran de la educación formal lo hacen antes de cumplir 20 años. Las cifras anteriores no recogen la gravedad del problema de la exclusión escolar en todo su dramatismo. En efecto, si se analizan las causas que tienen los jóvenes para no estudiar, resulta que sólo el 4,2% ha dejado los estudios porque ha querido y ha satisfecho sus expectativas educativas. Es decir, el 95,8% deja la escolaridad formal porque no tienen la oportunidad de estar allí: el 27,5% «deserta» por «falta de recursos»; el 23,1%, «por tener que trabajar»; el 11,3%, por «rendimiento»¹; el 8,8%, por carencias propias de la «oferta» educativa; el 5,7%, por «embarazo»; el 3,3%, por razones de salud. Y hay una razón para no estudiar que merece especial mención, a

saber: el 13,6% de la población no considera que sea importante estudiar. Esto apunta a un problema crucial: la irrelevancia sentida hacia la educación formal: hay cerca de 326.000 jóvenes que consideran que la oferta educativa no sirve; y, en consecuencia, no la quieren.

Esta exclusión tiene un agravante, a saber: los que se quedan dentro no están en una situación particularmente envidiable: La escuela ejerce sistemáticamente la violencia hacia nuestros niños. Los niños son recibidos en escuelas ranchificadas y luego son sometidos a un proceso sistemático de irrespeto: se les obliga a estudiar con libros mediocres y llenos de errores; se les imponen programas que no responden a sus intereses; los maestros, incapaces de conquistar a sus alumnos, pasan la mayor parte del tiempo entre «pasar la lista», llamar al orden, regañar, etc. Quien ha hecho observación etnográfica sabe que la iniciativa y la creatividad son sistemáticamente frustradas en la experiencia cotidiana del curriculum oculto. Valores como la solidaridad y el compañerismo están antes presentes en la contracultura estudiantil que en la cultura oficial de la escuela, donde la competencia y la sacralización de la nota son los nortes indudables.

La exclusión de un proceso que no es de calidad ocurre en un contexto de revolución tecnológica que abre las puertas a que los aprendizajes que se esperan de la educación formal se puedan realizar por vías no formales o informales. Y es a estos procesos, precisamente, a quienes hay que abrirle las puertas.

En consecuencia hay que abrirles las puertas al diálogo entre la educación formal y la no formal; pero éste no es escolarizando la educación no formal, sino desescolarizando la educación formal. □

Fabrizio Macor es sociólogo, encargado de Programas Especiales de la Dirección de Juventud del Ministerio de la Familia.

1. Esto es, no han recibido ayuda para seguir, a pesar de las propias limitaciones.